



Asamblea General

Distr.
LIMITADA

A/CN.4/L.530
24 de julio de 1996

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL
48° período de sesiones
Ginebra, 6 de mayo a 26 de julio de 1996

PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 48° PERIODO DE SESIONES

Relator: Sr. Igor Ivanovich LUKASHUK

Capítulo VI

LAS RESERVAS A LOS TRATADOS

A. Introducción

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

Capítulo VI

LAS RESERVAS A LOS TRATADOS

A. Introducción

1. La Asamblea General hizo suya, por su resolución 48/31, de 9 de diciembre de 1993, la decisión de la Comisión de Derecho Internacional de incluir en su programa de trabajo, en su 46º período de sesiones (1994), el tema titulado "La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados".
2. En su 46º período de sesiones, la Comisión nombró al Sr. Alain Pellet Relator Especial para ese tema 1/.
3. En su 47º período de sesiones, la Comisión recibió el primer informe del Relator Especial sobre el tema 2/. Examinó ese informe en sus sesiones 2400^a a 2404^a, 2406^a, 2407^a, 2412^a y 2416^a.
4. El Relator Especial resumió como sigue las conclusiones que había extraído del debate de la Comisión sobre el tema en examen:
 - a) La Comisión considera que el título del tema debería modificarse para que dijera "Las reservas a los tratados".
 - b) La Comisión debería tratar de adoptar una guía de la práctica en materia de reservas. De conformidad con el Estatuto de la Comisión y con su práctica usual, esta guía tomaría la forma de un proyecto de artículos cuyas disposiciones, junto con comentarios, constituirían directrices para la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales en materia de reservas; estas disposiciones, de ser necesario, irían acompañadas de cláusulas modelo.
 - c) Las disposiciones que preceden se interpretarán con flexibilidad y, si la Comisión estimara que debía desviarse de ellas sustancialmente, presentaría a la Asamblea General nuevas propuestas sobre la forma que podrían tomar los resultados de su labor.

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento N° 10 (A/49/10), párr. 382.

2/ Documento A/CN.4/470 y Corr.1.

- d) Existe consenso en la Comisión en el sentido de que no deben modificarse las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986.

5. Estas conclusiones constituyen, a juicio de la Comisión, el resultado del estudio preliminar solicitado por las resoluciones de la Asamblea General 48/31, de 9 de diciembre de 1993, y 49/51, de 9 de diciembre de 1994. La Comisión entendió que las cláusulas modelo sobre reservas que se incluirían en los tratados multilaterales tendrían por objeto reducir al mínimo las controversias en el futuro.

6. En su 2416ª sesión, celebrada el 13 de julio de 1995, la Comisión, de conformidad con su práctica anterior 3/, autorizó al Relator Especial a preparar un cuestionario detallado, en relación con las reservas a los tratados, para conocer la práctica de los Estados y las organizaciones internacionales, en particular los depositarios de convenciones multilaterales, y los problemas con que tropezaban. Este cuestionario se enviaría por conducto de la Secretaría a sus destinatarios.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

7. En el actual período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí el segundo informe del Relator Especial sobre el tema 4/. Este informe se presentó a la Comisión en su 2460ª sesión, celebrada el 16 de julio de 1996.

a) Presentación por el Relator Especial de su segundo informe

El informe comprendía dos capítulos completamente distintos:

El capítulo I "Panorama general del estudio" estaba dedicado a los trabajos futuros de la Comisión sobre la cuestión de las reservas a los tratados y proponía un esquema general provisional del estudio.

El capítulo II se titulaba "¿Unidad o diversidad del régimen jurídico de las reservas a los Estados?" y trataba, por una parte, del régimen jurídico de las reservas y de las normas sustantivas aplicables a las reservas en general

3/ Véase Anuario..., 1983, vol. II (Segunda parte), párr. 286.

4/ Documento A/CN.4/477 y A/CN.4/477/Add.1.

y, por otra, de la aplicación de ese régimen general a los tratados de derechos humanos. Acompañaba al informe, como anexo, una bibliografía de las reservas a los tratados.

8. En el capítulo I, el Relator Especial recordó las conclusiones de su primer informe y el cuestionario detallado que preparó en materia de reservas a los tratados a fin de conocer la práctica de los Estados y los problemas que éstos encontraban. Hasta la fecha, 14 Estados habían respondido a ese cuestionario. En ese primer capítulo, el Relator Especial definía el ámbito del estudio. En los debates que siguieron a la presentación del primer informe predominaron cinco grandes problemas de fondo:

- i) la definición de las reservas, su diferenciación de las declaraciones interpretativas y las diferencias de régimen jurídico que caracterizan a las dos instituciones;
- ii) la querella doctrinal (pero con consecuencias prácticas importantes) entre las escuelas de la "permisibilidad" o de la "admisibilidad", por una parte, y la de la "oponibilidad" por la otra, que se refería, en definitiva, al problema que podía considerarse prima facie como el fundamental planteado por el tema: las condiciones de licitud y de oponibilidad de las reservas;
- iii) la solución de controversias;
- iv) los efectos de la sucesión de Estados en las reservas y las objeciones a las reservas;
- v) la cuestión de la unidad o la diversidad del régimen jurídico aplicable a las reservas, en función del objeto del tratado al que se formulan.

9. De manera significativa, tras de los debates en el seno de la Sexta Comisión y de la Asamblea General, se pudo comprobar una concordancia de opiniones bastante patente, entre los miembros de la Comisión y los representantes de los Estados, con respecto a la jerarquía de los problemas que planteaba -o dejaba en suspenso- el régimen jurídico actual de las reservas a los tratados. Los principales temas que suscitaban problemas eran los siguientes:

- i) la cuestión de la propia definición de las reservas;
- ii) el régimen jurídico de las declaraciones interpretativas;
- iii) las objeciones a las reservas, y

- iv) las normas aplicables, en caso necesario, a las reservas a ciertas categorías de tratados, y en particular a los relativos a los derechos humanos.

10. El Relator Especial recordó la forma que adoptaría el estudio del tema. El estudio debería conservar los "logros" de las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 y llegar, en su caso, a una "guía de la práctica en materia de reservas". Esa guía, para ser realmente utilizable por los Estados y las organizaciones internacionales, debería dividirse en capítulos que adoptarían la siguiente forma:

- i) recordatorio de las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 ó 1986;
- ii) comentario de esas disposiciones en el que se aclaren su sentido, su alcance, sus ambigüedades y sus lagunas;
- iii) proyectos de artículo destinados a llenar esas lagunas o a eliminar esas ambigüedades; en relación con lo anterior,
 - comentario de esos proyectos de artículo;
- iv) cláusulas modelo que, en ciertos casos, podrán insertarse en determinados tratados y derogar los proyectos de artículo; en relación con lo anterior,
 - comentario de esas cláusulas modelo.

11. El esquema general provisional previsto por el Relator Especial comprendería en principio los siguientes capítulos:

- I. Unidad o diversidad del régimen jurídico de las reservas a los tratados multilaterales (reservas a los tratados relativos a los derechos humanos)
- II. Definición de reserva
(Este capítulo trataría también la cuestión de las declaraciones interpretativas y su régimen jurídico)
- III. Formulación y retirada de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones
- IV. Efectos de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones
- V. Situación de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones en caso de sucesión de Estados, y

VI. Solución de controversias relacionadas con el régimen de las reservas 5/.

12. El Relator Especial estimó que, salvo dificultades imprevistas y teniendo en cuenta el carácter puramente provisional de esa estimación, la tarea podría realizarse en un plazo de cuatro años, de forma que la primera lectura de la guía de la práctica en materia de reservas a los tratados pudiera acabarse en 1999 con el examen de los capítulos V y VI.

13. El capítulo II del informe trataba, por una parte, de la cuestión de la unidad o la diversidad del régimen jurídico de las reservas a los tratados y, por otra, de la cuestión específica de las reservas a los tratados relativos a los derechos humanos. A este respecto, el Relator Especial subrayó que este capítulo (que correspondía al I del esquema propuesto en el primer capítulo de su informe) trataba de determinar si las normas aplicables en materia de reservas a los tratados (tanto las codificadas por las Convenciones de 1969 o de 1986 como las de carácter consuetudinario) eran aplicables a todos los tratados, cualquiera que fuese su objeto y, en particular, a los tratados relativos a los derechos humanos. Recordó que esta cuestión se planteó con cierta insistencia tanto durante los debates como durante las deliberaciones de la Sexta Comisión de la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones. La cuestión correspondía a preocupaciones que inspiraban la práctica y la jurisprudencia recientes -y controvertidas- de los órganos encargados de vigilar la aplicación de los tratados relativos a los derechos humanos en materia de reservas. Por ello, le parecía necesario que la Comisión de Derecho Internacional expusiera el punto de vista del derecho internacional general, del que era uno de los órganos. Por esta razón, el Relator Especial había creído útil abordar el tema en su segundo informe, ya que le parecía presentar cierto carácter de urgencia.

14. La cuestión inicial se refería a la unidad o la diversidad del régimen o de los regímenes jurídicos aplicables a las reservas y podría formularse en estos términos: algunos tratados (por ejemplo los denominados "normativos") ¿quedaban o debían quedar, por su objeto, al margen de la aplicación del

5/ Véase el documento A/CN.4/477, párrafo 37.

régimen de Viena? En caso afirmativo, ¿a qué régimen o regímenes especiales deberían quedar sometidos en materia de reservas? Esta cuestión de principio podía examinarse en tres etapas.

15. a) En primer lugar, el Relator Especial se refirió a la diversidad de los tratados y el régimen jurídico de las reservas. Consideró que sería prudente limitar el estudio a los tratados normativos, dejando aparte otras categorías de tratados (tratados restringidos, actos constitutivos de organizaciones internacionales, tratados bilaterales, etc.), bien porque fueran ya objeto de un tratamiento distinto (sobre todo en las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986), bien porque se tuviese la intención de tratarlos en un estado ulterior del estudio. En cambio, los tratados "normativos" (convenciones de "codificación", de derechos humanos o que establecieran normas de conducta para el conjunto de los Estados en materia jurídica, técnica, social, humanitaria, etc.) planteaban problemas especiales para el tema estudiado porque, según algunas opiniones, el régimen jurídico general de las reservas les sería inaplicable o incluso porque esos instrumentos, por su propia naturaleza, no se prestaban a la formulación de reservas, muy especialmente los tratados relativos a los derechos humanos. Señaló que esta última expresión comprendía con frecuencia varias categorías de tratados de carácter a veces bastante diferente y que no constituían una categoría homogénea. Por otra parte, aunque tenían realmente ciertas particularidades esenciales que les daban su carácter "normativo", orientado sobre todo a establecer una reglamentación internacional común basada en valores compartidos, había que guardarse de adoptar una visión demasiado simplista: esos tratados no por ello dejaban de contener cláusulas típicamente contractuales.

16. En ese contexto, el Relator Especial había examinado ante todo la función del régimen jurídico de las reservas. En él había dos intereses aparentemente contradictorios: por un lado, el de la ampliación de una convención al mayor número posible de Estados y por otro el de la integridad de la propia convención. La función de las reglas aplicables a las reservas era encontrar un equilibrio entre esas exigencias opuestas: la búsqueda de la participación más amplia posible y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la ratio contrahendi, es decir, de lo que constituía la razón de ser del tratado.

17. El problema podía plantearse también en términos de consentimiento, teniendo en cuenta las bases consensuales del derecho de los tratados: desde este punto de vista, había que encontrar un equilibrio entre la libertad de consentimiento del Estado reservatario y la de los demás Estados Partes. A la luz de esas exigencias, el Relator Especial se había preguntado si el régimen jurídico de las reservas previsto en las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 era de aplicabilidad general y, en particular, si se adaptaba a los caracteres especiales de los tratados "normativos" (o más bien de las "cláusulas normativas" de los tratados multilaterales generales).

18. Para responder a esa pregunta, el Relator Especial se refirió a la historia del "régimen de Viena" y de sus fuentes (trabajos preparatorios, trabajos anteriores a la Comisión de Derecho Internacional, etc.) y señaló que los autores de este régimen se habían mostrado conscientes de las exigencias señaladas y habían querido adoptar unas normas de aplicabilidad general que respondieran a ellas. Tanto la Comisión de Derecho Internacional como las conferencias de codificación del derecho de los tratados habían querido establecer un régimen único aplicable a las reservas a los tratados, cualquiera que fuese su naturaleza o su objeto.

19. En una segunda etapa, el Relator Especial examinó la cuestión de si el "régimen de Viena" era aplicable, más especialmente, a los tratados normativos y, sobre todo, a los relativos a los derechos humanos.

(Esta cuestión estaba vinculada al problema de la oportunidad de admitir o no reservas a esos instrumentos, pero se trataba de un problema sin conclusión posible, que dependía de consideraciones políticas o ideológicas.)

No faltaron los argumentos a favor de una respuesta afirmativa (mayor participación de Estados en esos tratados, participación preferible a la ausencia de toda participación) o negativa (contradicción entre "reserva" y derechos humanos, especialidad de esos tratados en virtud de su función cuasilegislativa y uniformidad de su aplicación).

20. El Relator Especial señaló, sin embargo, que el verdadero problema jurídico consistía en interrogarse sobre la cuestión de saber si, cuando las Partes contratantes habían guardado silencio con respecto al régimen jurídico de las reservas, las normas de las Convenciones de 1969 y 1986 resultaban o no adecuadas para cualquier tipo de tratados, incluidos los "normativos" y, entre ellos, los tratados de derechos humanos.

21. Para dar una respuesta afirmativa a esta cuestión, el Relator Especial señaló que las normas aplicables a ese tipo de tratados en virtud de las Convenciones de Viena constituían un justo equilibrio entre las preocupaciones expresadas tanto por los "partidarios" de las reservas como por sus "opponentes". Señaló también que eran los caracteres fundamentales del "régimen de Viena", es decir, su agilidad, su flexibilidad y su adaptabilidad, los que le habían permitido responder a las necesidades especiales y características específicas de todos los tipos de tratados o de disposiciones convencionales y habían llevado a la Comisión de Derecho Internacional a prescindir, en 1963 y 1966, de toda regla derogatoria a favor de los tratados normativos.

22. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre las "Reservas a la Convención sobre el Genocidio" había señalado ya las ventajas de una mayor flexibilidad en la práctica internacional de las convenciones multilaterales, que había aplicado a un tratado de derechos humanos por excelencia. El Relator Especial identificó tres elementos que permitían aplicar de manera satisfactoria el "régimen de Viena" a todos los tratados, cualquiera que fuera su objeto, incluidos los tratados de derechos humanos:

- a) la admisibilidad de las reservas debía apreciarse teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado;
- b) la libertad de consentimiento de las otras Partes contratantes se conservaba íntegramente por el juego de las aceptaciones y objeciones; y
- c) el derecho a "formular" reservas sólo tenía un carácter supletorio y cada tratado podía limitar esa libertad e incluso prohibir toda reserva, o algunas de ellas.

23. Por consiguiente, el "régimen de Viena" resultaba adaptado a las particularidades de los tratados normativos. El Relator Especial señaló que ni los problemas relacionados con la "integridad" de los tratados normativos, ni los tendientes a la "no reciprocidad" de las obligaciones, ni los problemas relativos a la igualdad entre las Partes podían impedir la aplicabilidad del "régimen de Viena". En efecto, resultaba que:

- a) el régimen de reservas establecido por las Convenciones de 1969 y 1986 se concibió por sus autores para que pudiera y debiera aplicarse a todos los tratados multilaterales, cualquiera que fuera

su objeto, con excepción de algunos tratados concertados entre un número de Partes restringido y de los actos constitutivos de organizaciones internacionales, para los cuales se previeron derogaciones limitadas;

- b) ese régimen, por su agilidad y su flexibilidad, se adaptaba a las particularidades de los tratados normativos, incluidos los instrumentos relativos a los derechos humanos;
- c) aunque no asegurase la integridad absoluta, lo que no era compatible con la definición misma de reservas, conservaba lo esencial de su contenido y garantizaba que éste no fuera desnaturalizado;
- d) esta conclusión no era contradicha por los argumentos basados en la pretendida infracción de los principios de reciprocidad y de igualdad entre las Partes: si esa infracción existía sería como consecuencia de las reservas mismas y no de las normas que les eran aplicables; además, esas objeciones no eran compatibles con la naturaleza misma de los tratados normativos que, precisamente, no se basaban en la reciprocidad de los compromisos aceptados por las Partes;
- e) no era necesario pronunciarse sobre la oportunidad de autorizar reservas a las disposiciones normativas, incluidas las relativas a los derechos humanos: si se consideraba que debían prohibirse, las Partes tenían plena libertad para excluirlas o limitarlas cuanto fuera preciso, incluyendo una cláusula expresa en tal sentido en el tratado, lo que sería perfectamente compatible con las normas de Viena, que sólo tenían carácter supletorio.

24. c) En tercer lugar, el Relator Especial examinó el funcionamiento del régimen general de reservas y especialmente la aplicación del régimen de Viena a los tratados de derechos humanos. En la práctica, el criterio fundamental del objeto y el fin del tratado se aplicaba a las reservas a esos tratados (incluidos los que carecían de cláusulas sobre reservas). Tanto los textos de muchos tratados relativos a los derechos humanos como la práctica de los Estados consagraban ese principio fundamental: la naturaleza especial de los tratados normativos no influía en el régimen de reservas.

25. Pasando a ocuparse de los mecanismos de control de la aplicación del régimen de reservas, el Relator Especial destacó que, desde las Convenciones

de Viena, se habían creado controles complementarios directamente a cargo de los órganos de vigilancia de los instrumentos de derechos humanos.

Por consiguiente, existían ahora dos tipos paralelos de control de la licitud de las reservas en esa materia: los mecanismos tradicionales (control por los Estados contratantes y, en su caso, por los órganos jurisdiccionales en el marco de la solución de controversias) y los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos. La función de estos últimos órganos en materia de reservas había cobrado gran amplitud en los últimos 15 años, tanto en el plano regional (práctica de las comisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) como en el plano internacional (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, sobre todo, Comité de Derechos Humanos 6/, etc.).

26. El fundamento del control ejercido por los órganos de vigilancia estaba vinculado a su propia misión; dado que esos instrumentos creaban órganos encargados de vigilar su aplicación, tales órganos, de conformidad con un principio general de derecho bien establecido en derecho internacional general, tenían competencia sobre su propia competencia. En efecto, no podían desempeñar sus funciones si no eran capaces de determinar el ámbito exacto de sus competencias con respecto a los Estados interesados, y ese ámbito dependía del alcance y la validez de la expresión del consentimiento en quedar obligado. Por lo demás, en la práctica, los órganos de vigilancia controlaban la licitud de las reservas basándose en el criterio del objeto y el fin del tratado. El Relator Especial señaló que, por consiguiente y teniendo en cuenta esa evolución, existía en la esfera de los tratados de derechos humanos una combinación de diferentes modos de control de la licitud (el control clásico a cargo de los Estados contratantes y, paralelamente, el control por un órgano de vigilancia, cuando éste era establecido por el tratado, sin excluir a otros órganos, como los órganos jurisdiccionales o arbitrales internacionales en el marco de la solución de controversias e, incluso, los tribunales nacionales). Esta situación no excluía sino que, al contrario, implicaba cierta complementariedad entre los diferentes modos de control y una cooperación entre los órganos encargados de ese control.

6/ Véase el Comentario general N° 24, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 de noviembre de 1994.

27. El Relator Especial se preguntó cuáles eran las consecuencias de las comprobaciones hechas por los órganos de control. Según algunas opiniones basadas en el principio de la "disociabilidad" de la reserva (posibilidad de disociarla del resto de la expresión por un Estado de su consentimiento en quedar obligado), sólo la reserva "ilícita" debía considerarse como nula, mientras que el Estado siguiera siendo parte en el tratado. Sin embargo, esta tesis contradecía el principio consensual, que era la base de toda obligación convencional.

28. El Relator Especial estimó, sin embargo, que el valor jurídico de las comprobaciones hechas por los órganos de vigilancia en el ejercicio de su poder de control no podía exceder del que resultara de las facultades que se les hubieran dado para desempeñar su misión general de vigilancia.

Ni siquiera en caso de comprobar la ilicitud de una reserva podían sustituir al Estado para determinar si éste quería o no seguir vinculado por el tratado a pesar de la ilicitud de la reserva. Correspondía siempre a los Estados, y sólo a ellos, remediar las ilicitudes comprobadas, después de haber examinado de buena fe esas comprobaciones.

29. En ningún caso podían sustituir los órganos de control de la licitud de las reservas, cualesquiera que fuesen, al Estado reservatario en la determinación de las intenciones de éste en cuanto al ámbito de las obligaciones convencionales que estaba dispuesto a asumir; por consiguiente, sólo a él incumbía decidir de qué forma convenía poner fin al vicio que, por razón de la ilicitud de la reserva, pudiera afectar a la expresión de su consentimiento. Ese "remedio" podía traducirse en la retirada pura y simple de la reserva ilícita, su modificación en un sentido compatible con el objeto y el fin del tratado o la terminación de la participación del Estado en ese tratado.

30. A manera de conclusión, el Relator Especial resumió las principales afirmaciones hechas en su informe. Señaló que las reservas a los tratados no exigían una diversificación normativa; el régimen vigente se caracterizaba por su agilidad y su adaptabilidad, y lograba de manera satisfactoria el necesario equilibrio entre las exigencias contrapuestas de la integridad y la universalidad del tratado. Ese objetivo de equilibrio era universal. Cualquiera que fuera su objeto, un tratado seguía siendo un tratado y expresaba la voluntad de los Estados (o de las organizaciones

internacionales) que eran partes en él. El régimen de reservas tenía por objetivo permitir que esas voluntades se expresaran de manera equilibrada y lo lograba de una forma globalmente satisfactoria. Sería lamentable ponerlo en tela de juicio dando una importancia indebida a consideraciones sectoriales que podían encajar perfectamente en el régimen existente.

31. Según el Relator Especial, esa conclusión general debía matizarse, sin embargo por dos consideraciones:

- a) en primer lugar, no podía negarse que el derecho no se había detenido en 1951 ó 1969; habían surgido problemas que entonces no se planteaban (o apenas se planteaban) y era necesario responder a ellos; esa respuesta podía darse dentro del espíritu de las "normas de Viena", quedando entendido que éstas deberían adaptarse y ampliarse, llegado el caso, cuando se sintiera la necesidad;
- b) en segundo lugar, había que tener presente que el medio normal de adaptar las normas generales del derecho internacional a las necesidades y circunstancias particulares era adoptar, por vía convencional, las normas adecuadas, lo que podía hacerse fácilmente en la esfera de las reservas adoptando cláusulas de reserva derogatorias, si las partes sentían esa necesidad.

32. Ninguna consideración decisiva parecía imponer la adopción de un régimen particular de reservas para los tratados normativos, ni siquiera para los tratados de derechos humanos. Las particularidades de estos instrumentos fueron tenidas en cuenta por los jueces de 1951 y los "codificadores" de años posteriores, pero no les pareció que justificaran un régimen general derogatorio.

33. En cambio, se podía considerar legítimamente que los redactores de las Convenciones de Viena no habían previsto la función que los órganos de vigilancia de la aplicación de algunos tratados podrían tener que desempeñar en la aplicación del régimen de reservas que habían establecido, especialmente en la esfera de la protección de los derechos humanos. Esa función, sin embargo, podía limitarse bastante fácilmente mediante la aplicación de principios generales de derecho internacional y conservando tanto el espíritu como las funciones de un régimen de reservas y las que incumbían a esos órganos.

34. El Relator Especial recordó que había unido a su informe un proyecto de resolución de la Comisión de Derecho Internacional sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los de derechos humanos, destinado a la Asamblea General, con el fin de puntualizar y aclarar los datos jurídicos sobre esa cuestión.

35. Por falta de tiempo, la Comisión no pudo examinar el informe ni el proyecto de resolución, y decidió aplazar el debate sobre el tema hasta el año próximo. Sin embargo, muchos miembros felicitaron al Relator Especial por su excelente informe, denso, lúcido y equilibrado, sobre una cuestión sumamente compleja y delicada. En este sentido, recordaron que sería conveniente que la Comisión estudiara a fondo algunas cuestiones planteadas por el informe, teniendo en cuenta quizá otros tipos de tratados normativos. Se elogió también el hecho de haber acompañado como anexo al informe una bibliografía. Algunos miembros lamentaron que la Comisión no hubiera tenido tiempo en su 48º período de sesiones de continuar la labor iniciada en ese informe.

36. Por otra parte, algunos miembros aprobaron en principio la idea de adoptar una resolución en la línea propuesta por el Relator Especial. Sin oponerse a esa idea, otros miembros expresaron dudas sobre la oportunidad de tal resolución.

37. Finalmente, se suscitó también la cuestión de la creación de un grupo de trabajo sobre el tema.
